ANEXO I

Programa experimental a desarrollar por la Comunidad Autónoma de Murcia en 1992

- A) Denominación del programa: «Programa de intervención en la familia con situación de maltrato».
- B) Objetivos generales:
1. Decidir el tratamiento más adecuado una vez pronosticada la situación.
 2. Recuperar a la pareja de la situación estresante que la lleva a un comportamiento violento.
 3. Dotar al niño de la competencia necesaria para superar el trauma vivido.
 4. Formar en técnicas específicas para la intervención del programa.
 5. Diseñar pruebas de evaluación que sean necesarias (registros de observación, entrevistas estructuradas).
- C) Población a atender: 10 familias.
- D) Zonas: Murcia.

ANEXO II

Valoración económica del programa

- A) Denominación del programa: «Programa de intervención en la familia con situación de maltrato».
- B) Coste del programa:
- Coste total: 29.708.000 pesetas.
- Aportación de la Comunidad Autónoma: 19.708.000 pesetas.
- Aportación del Ministerio de Asuntos Sociales: 10.000.000 de pesetas.

TRIBUNAL SUPREMO**3845**

SENTENCIA de 4 de diciembre de 1992 recaída en el conflicto de jurisdicción número 1/92-M, planteado entre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet (Valencia) y el Juzgado Militar Territorial número 16, con sede en Valencia.

Don José María López-Mora Suárez, Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo,

Certifico: Que en el conflicto de jurisdicción a que se hace mención se ha dictado la siguiente.

EN NOMBRE DEL REY

La Sala de Conflictos de Jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales Ordinarios y los de la Jurisdicción Militar, compuesta por los excelentísimos señores don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Auturo Gimeno Amiguet, don Francisco Javier Sánchez del Río y Sierra, don Enrique Bacigalupo Zapater y don José Antonio Martín Pallín, Magistrados, dotados de la potestad jurisdiccional reconocida en la Constitución, dicta la siguiente

SENTENCIA

En la villa de Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

Visto por la Sala de Conflictos de Jurisdicción, integrada por los excelentísimos señores Presidente y Magistrados indicados, el conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet (Valencia) y el Juzgado Militar Territorial número 16, con sede en Valencia, para conocer de diligencias incoadas con motivo de accidente de aviación sufrido por avión «Mirage III», perteneciente al Ala número 11, establecida en la Base Aérea de Manises (Valencia), pilotado por el Capitán de la Escala Superior del Cuerpo General del Ejército del Aire don Fernando Sastre Calvillo, y siendo Ponente el excelentísimo señor don Francisco Javier Sánchez del Río y Sierra, quien, previa deliberación y votación, expresa así el parecer de la Sala.

Antecedentes de hecho

Primero.—A los solos efectos de resolver el conflicto jurisdiccional planteado, se acepta que el día 3 de febrero de 1992, sobre las trece cincuenta horas, el avión del Ejército del Aire C-11-13 (tipo «Mirage III EE»), pilotado por el Capitán don Fernando Sastre Calvillo, sufrió un accidente en el momento de su toma de contacto con tierra, cuando efectuaba su maniobra de aterrizaje, y, tras inclinarse bruscamente hacia su derecha, el Piloto perdió su control saliéndose de la pista y continuando su carrera hasta su detención en las proximidades de un avión de Iberia, tras arrastrar una furgoneta «Renault-4», matrícula M-8665-EN, dos carrillos de transporte de equipajes y un carro con un grupo eléctrico utilizado por el servicio de limpieza de aeronaves.

Segundo.—Como consecuencia del accidente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet acordó incoar procedimiento bajo el número 44/1992, y oír al Fiscal sobre competencia, dictando, con fecha 7 de abril de 1992, Auto por el que, considerándose competente, se requería de inhibición al Juzgado Togado Militar número 16 de Valencia. Con fecha 2 de junio del mismo año, considerando los hechos como posible falta de imprudencia simple con infracción de reglamentos, comprendida en el artículo 586 bis del Código Penal, y al no haber sido presentada denuncia por parte del ofendido, se dictó Auto de archivo provisional por faltar el citado requisito de procedibilidad.

Tercero.—Como consecuencia del mismo accidente, el Juzgado Togado Militar número 16, con sede en Valencia, inició, bajo el número 16/8/92, diligencias previas en las que, una vez recibido informe técnico del accidente, se dictó Auto de archivo el día 21 de febrero. Con posterioridad a esta resolución aparecen incorporados nuevos documentos, entre los que se cuentan la valoración de daños causados, el informe emitido por el Comandante designado para formalizar el atestado y, finalmente, el requerimiento de inhibición, que dio lugar a Auto de 25 de mayo, mediante el cual, una vez oído el Fiscal jurídico militar, quien se manifiesta en el sentido de acceder a aquel requerimiento, se acordó mantener la competencia y tener por planteado el presente conflicto de jurisdicción.

Cuarto.—El Fiscal ha emitido informe en el que se estima que «como quiera que, a consecuencia del accidente, se produjeron daños materiales a diversos vehículos civiles, no estando los hechos incurso en los supuestos de los que corresponde conocer a la Jurisdicción Militar, procede, de acuerdo con los artículos 12 al 18 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio; disposición adicional, apartado 1.º, de la Ley 9/1988, de 21 de abril, en relación con los artículos 7, 10 y 11 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril; artículo 9, 3.º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; artículos 10 a 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y disposición derogatoria del Código Penal Militar y demás concordantes, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet, al que se le remitirán las actuaciones».

Fundamentos de Derecho

Primero.—En los tres informes que se han emitido por el Ministerio Fiscal, el primero en el expediente de juicio de faltas número 44/1992, a instancias del Juzgado de Quart de Poblet, el segundo a petición del Juzgado Togado Militar interviniente y el tercero en el presente conflicto, se mantiene la tesis de la competencia de la Jurisdicción Ordinaria sin más fundamento que el hecho de haberse causado daños en la propiedad privada, pero sin que tal afirmación vaya acompañada de razonamiento jurídico alguno en relación no con el sistema procesal, sino con la normativa sustantiva aplicable al caso. El solo resultado de haber causado daños a elementos ajenos al servicio de las Fuerzas Aéreas sería insuficiente, en sí mismo, para justificar la decisión sobre competencia en cualquier sentido en que ésta se tomase. El problema no radica tanto en los resultados como en la naturaleza jurídica del hecho, pues lo que determina la competencia de la Jurisdicción Militar es, de acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 4/1985, que el posible delito cometido esté incluido en el Código Penal Militar, es decir, que los hechos puedan ser constitutivos de un delito militar en el estricto sentido que se desprende del artículo 20 del mencionado Código, según el cual «son delitos militares las acciones y omisiones dolosas o culposas penadas en este Código». El problema, pues, no puede resolverse ni con el criterio del resultado —un resultado, por otra parte, parcial, pues en ningún momento se ha tenido en cuenta el valor de un avión perdido—, ni sin criterio jurídico alguno, que es como lo hizo el Juzgado requirente, que se limita a decir que los hechos no quedan incurso entre los que corresponde conocer a la Jurisdicción Militar, sin añadir razonamiento o motivación alguna sobre tal afirmación, que se utiliza como premisa de la resolución y no como conclusión que debería conducir a ésta.

Segundo.—A fin de evitar incurrir en similares defectos, deberíamos aquí argumentar sobre los hechos a fin de determinar su posible esencia. Por supuesto, el accidente sufrido ha podido ser causado por un fallo mecánico y, por tanto, por causa no imputable al Piloto que en aquel momento lo tripulaba; pero también pudo ser causado por una negligencia o por una impericia de aquél; en el informe técnico se afirma que el accidente tuvo su origen en el hecho de que las dos ruedas del tren de aterrizaje estaban frenadas en el momento del contacto con la tierra, lo que produjo el reventón del neumático derecho y el limado de ocho de las doce lonas con que cuentan en el neumático izquierdo; y que tal suceso pudo ocurrir porque el Piloto presionase los pedales del freno y al faltar alguno de sus precisos mecanismos quedase alguna presión residual en el sistema de frenado. En este momento no cabe hablar de responsabilidad alguna del Piloto, puesto que, según los distintos informes, parece que su comportamiento fue correcto y coincide con los procedimientos que han de seguirse en las circunstancias del caso. Pero es lo cierto que si la conducta del Capitán que tripulaba el avión hubiese sido negligente o imprudente, ni nos encontraríamos ante la falta descrita en el artículo 586 bis del Código Penal que cita el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Quart de Poblet, ni estaríamos ante la descrita en el artículo 600 del mismo Código, ni cabría aplicar, en el supuesto de imprudencia temeraria, el artículo 565, pues tales conductas están expresamente incluidas bien en el artículo 155, bien en el 159 del Código Penal Militar. El primero castiga al militar que, en tiempo de paz y por imprudencia, cause la pérdida de una aeronave militar; el segundo, al militar que, por negligencia profesional o imprudencia, produzca daños durante la ejecución de un servicio de armas. Y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal Militar, son actos de servicio de armas, entre otros, todos los que se refieran al vuelo de las aeronaves militares. En definitiva, puede decirse que el hecho de que se produzcan daños en objetos civiles no es determinante de la competencia, pues si tales daños proceden de un acto de servicio de armas —cual es el vuelo de aeronave militar— pudieran ser constitutivos de delito militar.

Tercero.—Las anteriores consideraciones en forma alguna pueden considerarse como juicios anticipados sobre lo ocurrido. Entre otras razones, porque la parca información que se contiene tanto en el expediente que procede del Juzgado de Quart de Poblet como en el procedente del Juzgado Militar que procedió, a nuestro juicio poco ortodoxamente, a una apresurada decisión de archivo cuando ni siquiera habían quedado acreditados los daños causados, impediría la formación de una opinión definitiva. Ni es éste, además, momento adecuado, ni ésta la Sala competente para emitir cualquier tipo de juicio que pudiese ser condicionante de posteriores decisiones jurisdiccionales. Pero eso no quiere decir que, aunque sólo sea a título provisional y abandonando a los órganos judiciales competentes lo que sólo a ellos pertenece, no podamos declarar que los hechos, en el supuesto de que tuviesen naturaleza punible o sancionable, serían constitutivos exclusivamente de un delito o de una falta disciplinaria militar; y que, en consecuencia, para su depuración sólo es competente la Jurisdicción Militar, ya que se trata de acciones desarrolladas en el ámbito estrictamente castrense (servicio de armas), aunque, como consecuencia de ellas, se hayan producido no sólo los gravísimos desperfectos del avión —que resultó irrecuperable—, sino otros daños en bienes pertenecientes a la Compañía Iberia y al aeropuerto de Valencia.

En consecuencia, fallamos:

Que debemos resolver y resolvemos el conflicto positivo de jurisdicción planteado entre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet (Valencia) y el Juzgado Togado Militar número 16, con sede en Valencia, para conocer del accidente sufrido por un avión militar pilotado por el Capitán don Fernando Sastre Calvillo, en favor del Juzgado Togado Militar número 16, al que se remitirán los Autos para su continuación con arreglo a Derecho.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Pascual Sala Sánchez.—Arturo Gimeno Amiguet.—Francisco Javier Sánchez del Río y Sierra.—Enrique Bacigalupo Zapater.—José Antonio Martín Pallín.

Publicación.—Lefda y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente excelentísimo señor don Francisco Javier Sánchez del Río y Sierra, de la Sala de Conflictos de este Tribunal, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, certifico.—Firmado y rubricado.

Es copia conforme con su original. Y para que conste y publicar en el «Boletín Oficial del Estado», expido y firmo la presente en Madrid a 23 de diciembre de 1992.

3846

SENTENCIA de 10 de diciembre de 1992, recaída en el conflicto de jurisdicción número 5/1992, planteado entre el Juzgado de Instrucción de Tremp (Lérida) y el Juzgado Togado Militar número 31, con sede en Barcelona.

Don José María López-Mora Suárez, Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo,

Certifico: Que en el conflicto de jurisdicción a que se hace mención, se ha dictado la siguiente sentencia.

EN NOMBRE DEL REY

La Sala de Conflictos de Jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales ordinarios y los de la Jurisdicción Militar, compuesta por los excelentísimos señores don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Arturo Gimeno Amiguet, don Francisco Javier Sánchez del Río y Sierra, don Enrique Bacigalupo Zapater y don José A. Martín Pallín, Magistrados, dotada de la potestad jurisdiccional reconocida en la Constitución, dicta la siguiente sentencia:

En la villa de Madrid, a diez de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

Visto por la Sala de Conflictos de Jurisdicción, integrada por los excelentísimos señores Presidente del Tribunal Supremo y Magistrados que arriba se expresan, el conflicto negativo de jurisdicción suscitado entre el Juzgado de Instrucción de Tremp (Lérida) y el Juzgado Togado Militar número 31, con sede en Barcelona, sobre negativa a prestar el servicio militar por parte de Daniel García del Castillo; siendo Ponente el excelentísimo señor don Francisco Javier Sánchez del Río y Sierra, quien, previa deliberación y votación, expresa así el parecer de la Sala:

Antecedentes de hecho

Primero.—El día 30 de mayo de 1991, el Juez Togado Militar número 31, de Barcelona, dictó auto de incoación de sumario como consecuencia de hechos que describe así: «Que se ha recibido de la AGBS de Tremp documentación relativa a la conducta del recluta Daniel García del Castillo, que, habiéndose incorporado en dicha Academia el día 29 de mayo pasado, para realizar el servicio militar como procedente de renuncia a la objeción de conciencia, se niega a realizarlo alegando motivos de conciencia». Se deduce de lo actuado que el citado recluta había acudido en su momento al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, del que obtuvo el reconocimiento de tal condición el 19 de julio de 1989; posteriormente, el 17 de diciembre de 1990, renunció expresamente a su estatuto de objetor, habiendo sido aceptada la renuncia por el propio Consejo el 16 de enero de 1991. Como consecuencia de ello, fue agregado al reemplazo de 1991, segundo llamamiento, habiéndosele destinado a la Academia General Básica de Suboficiales de Tremp, en la que hizo su presentación, haciendo constar que, en su condición de testigo cristiano de Jehová, se negaba a cumplir el servicio militar y que había renunciado a la condición de objetor de conciencia por exigírsele la prestación de un servicio social sustitutorio, y que deseaba acogerse a las Leyes militares. Con fecha 3 de junio de 1991, el Juez Togado Militar número 31 dictó auto de procesamiento por existir indicios suficientes de comisión de un delito del artículo 127 del Código Penal Militar, y el 27 de enero de 1992, ya concluso el sumario, dictó auto de inhibición en favor de la Jurisdicción Ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria séptima, dos, de la Ley Orgánica 13/1991, del Servicio Militar, remitiendo las actuaciones al Juzgado de Instrucción de Tremp.

Segundo.—Recibido el sumario por el Juzgado citado y estando concluso el procedimiento, se acordó su remisión al Juzgado de lo Penal número 1 de Lérida, que lo devolvió para su continuación, de acuerdo con el procedimiento abreviado previsto en los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y pasados los autos al Ministerio Fiscal, emitió informe en el sentido de que habían de remitirse los autos nuevamente a la Jurisdicción Militar, por no ser encuadrable la conducta del procesado en ninguno de los dos supuestos contemplados por los artículos 135 bis, h), y 135 bis, i), del Código Penal, ya que sólo son aplicables cuando se da el requisito de que no se haya producido la incorporación al servicio militar, lo que no ocurre con Daniel García del Castillo, que hizo su presentación en la AGBS el 29 de mayo de 1991. Entendía el Fiscal, y así lo aceptó el Juzgado, que los hechos podrían, acaso, constituir un delito del artículo 119 bis o del 120 del Código Penal Militar, por lo que, mediante auto de 10 de agosto de 1992, se inhibió el Juez ordinario en favor del militar, quedando planteado conflicto de jurisdicción al no aceptar éste su competencia.